

Piden desafuero contra diputado federal del PT

NOÉ ÁLVAREZ PASCUAL

Con más de 500 mil firmas de respaldo ciudadano, el diputado local Octavio Martínez Vargas formalizó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la solicitud de investigación y desafuero contra el diputado federal y exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, a quien señala de presuntos vínculos con el crimen organizado y actos de corrupción cometidos durante su administración municipal de 2018 a 2024.

La petición, contenida en el oficio DL/DTTOIV/189/2025 dirigido al fiscal José Luis Cervantes Martínez, solicita que la FGJEM inicie las investigaciones necesarias para sustentar la declaración de procedencia ante el Congreso de la Unión, ya que afirma que existen elementos que acreditan la probable responsabilidad de Vilchis en la operación de la estructura criminal "Unión 300", liderada por Luis "El Conejo" y presuntamente fortalecida bajo su gobierno.

"Con más de 500 mil firmas de respaldo formalizamos la solicitud de desafuero al diputado delincuente del PT, Fernando Vilchis", publicó Martínez Vargas en sus redes sociales.

Entre las pruebas expuestas destaca el sistema de videovigilancia "Jaguar", un proyecto de más de 600 cámaras instaladas sin licitación, con un costo estimado de 400 millones de pesos, que según el legislador fueron colocadas en empresas, comercios, vialidades, viviendas y la Central de Abastos, y monitoreadas desde un edificio de Seguridad Pública sin conexión al C5 estatal, lo que permitió un control absoluto de la información.

En palabras del diputado, este sistema habría servido de base para un centro clandestino de espionaje descubierto en julio de 2025, operado como un "espejo" del sistema Jaguar y presuntamente utilizado para extorsión, despojo y secuestro.

Martínez Vargas también vincula a Vilchis con Hugo Francisco "N", dirigente de la organización Gopez, detenido por despojo y extorsión, grupo que operaba principalmente en Ecatepec con apoyo de policías municipales, y que fungía como operador político del exalcalde.

En materia financiera, el diputado denunció un probable daño al erario por más de 315 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, así como una deuda histórica del municipio que supera los 4 mil 500 millones.

Señaló irregularidades por casi mil 800 millones de pesos, pagos excesivos, nepotismo, finiquitos irregulares a familiares, despojos de predios y presiones en la elección sindical del transporte para controlar cuotas.